

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 17 de julio de 2025

Vistos los autos: “Favicur I.C.S.A. c/ Corrientes, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, de los que

Resulta:

I) A fs. 116/133 se presenta Favicur I.C.S.A. e inicia acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Corrientes, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, declarándose la inconstitucionalidad del art. 6º, último párrafo, de la ley local 6249, y la ilegitimidad del ajuste del impuesto sobre los ingresos brutos por los anticipos 01 de 2014 a 06 de 2016, exigido por la parte demandada por el hecho de que la actora se encuentra radicada fuera del territorio correntino.

Expone que es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de cristales de seguridad templados y laminados, y que se encuentra inscripta, a los fines de la tributación del impuesto a los ingresos brutos, bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Describe que la Dirección General de Rentas provincial dio inicio a una fiscalización a la empresa actora, por los períodos antes indicados, por aplicar una alícuota menor a la prevista en el referido art. 6º de la ley tarifaria, en función de que desarrolla su actividad primaria o industrial en establecimientos ubicados fuera de la Provincia de Corrientes. Agrega que, posteriormente, el Estado provincial inició una determinación de oficio, dictando la “Vista 2148/2016”

Indica las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.

Agrega que la provincia ejerce sus facultades impositivas estableciendo una discriminación en función del origen del producto, por lo que lesiona la cláusula del comercio, las prohibiciones de gravar la mera circulación territorial y de establecer aduanas interiores, violando, a su vez, los principios de igualdad, de razonabilidad y de supremacía; todo ello consagrado en la Constitución Nacional.

Solicita que se cite como tercero obligado al Estado Nacional, por los motivos que expone en el punto 4 de la demanda.

II) Según surge de la copia agregada a fs. 172, dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa (ver copias de fs. 173/174). A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso –en resumen– que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprendían de la "Orden de inspección 0184/2016 DF-DGR", de la "Nota de ajuste 1631/2016 DF-DGR" y de la "Corrida de vista 2148/2016". También estableció que la actora tributara, en lo sucesivo, idéntica alícuota a la prevista en la legislación local para aquellos contribuyentes que desarrollasen la misma actividad en establecimientos

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

ubicados en la Provincia de Corrientes; todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones. Asimismo, desestimó la citación como tercero del Estado Nacional, pretendida por la firma demandante.

III) A fs. 180/189 vta. la Provincia de Corrientes contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, sostiene que no se reúnen los requisitos de procedencia de la acción, dado que no se configura una situación de incertidumbre que pueda producir a la actora un perjuicio injusto o una lesión actual.

Destaca –entre otras consideraciones- que el objetivo de la medida fiscal en cuestión es el de alentar y favorecer ciertas actividades, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo (art. 75, inciso 18, de la Ley Fundamental). Luego señala que la actora no desarrolla “actividad industrial” en la Provincia de Corrientes, sino “operaciones de comercialización de compra-venta”, lo que constituye un hecho imponible alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos a la alícuota de todo vendedor foráneo.

Remarca que la ley impugnada pone en práctica la política de “promover la radicación de industrias en su territorio con incentivos fiscales acordes a las inversiones efectuadas”, en ejercicio de las facultades no delegadas al Gobierno Federal (artículo 121 de la Constitución Nacional).

Por último, aduce que los efectos del art. 6º de la ley local 6249 no le causan agravio a la actora, ya que traslada el impuesto a los consumidores.

IV) A fs. 355 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, donde opinó, en lo que aquí interesa, que no existe “causa” o “caso contencioso” que permita la intervención judicial. Finalmente, a fs. 356, se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

1º) Que tal como lo ha decidido el Tribunal en su oportunidad (ver fs. 173/174), esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley local 6249, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver "Orden de inspección 0184/2016 DF-DGR", fs. 1, "Nota de ajuste 1631/2016 DF-DGR",

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

fs. 2/6, "Corrida de vista 2148/2016", fs. 7/11, y copias certificadas del expediente administrativo 123-2507-14410-2016, obrantes a fs. 218/336, especialmente el "Informe final de fs. 333/334 vta.), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).

3°) Que, en cuanto al fondo del asunto, la cuestión presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014(50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar la actividad ya referida de la actora con una alícuota más gravosa (2,90 %), obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el presente proceso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte

de “aduana interior” vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480, ya citado).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Favicur I.C.S.A. contra la Provincia de Corrientes. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 6° de la ley 6249 de dicha provincia, como así también la de la pretensión fiscal plasmada en la “Corrida de vista 2148/2016”, emitida por la Dirección General de Rentas provincial. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



ORIGINARIO

Favicur I.C.S.A. c/ Corrientes, Provincia  
de y otro s/ acción declarativa de  
inconstitucionalidad.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Parte actora: **Favicur I.C.S.A.**, representada por los **doctores Julio Enrique Martínez Ceballos y Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón**, con el patrocinio letrado del **doctor José Esteban Lunad Rocha**.

Parte demandada: **Provincia de Corrientes**, representada por el **doctor Gabriel Bouzat** y la **Dra. Eleazar Christian Meléndez**.